

Correo Argentina Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión Nº 3146

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

9ª REUNIÓN — 3ª SESIÓN ORDINARIA — 29 DE MAYO DE 1991

Presidencia del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor LUIS A. J. BRASESCO

Secretario: señor HUGO RAÚL FLOMBAUM

Prosecretarios: señores MARIO DÉLFOR FASSI y DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
FIGUEROA, José Oscar
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Liliana
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFERRIÈRE, Ricardo E.
LOSADA, Mario Aníbal
LUDUEÑA, Felipe
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARÍN, Rubén Hugo
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison

POSLEMAN, Eduardo A.
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de DENTONE, Alicia
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
STORANI, Conrado H.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VACA, Eduardo P.
VELÁZQUEZ, Héctor

AUSENTES, CON AVISO:

AMOEDO, Julio A.
COSTANZO, Remo José
JUÁREZ, Carlos A.
LEÓN, Luis Agustín
MAC KARTHY, César
MENEM, Eduardo.
RIVAS, Olijela del Valle
SAPAG, Elías
SNOPEK, Carlos
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan

sión en sesiones extraordinarias de un proyecto sobre Ley Nacional de Turismo. (O.V.-314/90.) Se aprueba su pase al Archivo. (Pág. 785.)

46. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por la que se solicitan modificaciones al proyecto de comunicación de su autoría en relación con partidas presupuestarias para obras del Colegio Nacional General Manuel Belgrano, en Corrientes. (S.-894/90.) Se aprueba su pase al Archivo. (Página 785.)
47. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Asuntos Constitucionales en el proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière por el que se solicita la construcción de rampas para discapacitados en los cruces de calles y el señalamiento en sistema Braille en las columnas con la identificación de las mismas. (S.-857/90.) Se aprueba. (Pág. 786.)
48. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita activar el pago de fondos adeudados a plantadores forestales misioneros. (S.-20/91.) Se aprueba. (Pág. 787.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita se intensifique la protección de los bosques naturales del país. (S.-1.046/90.) Se aprueba. (Pág. 787.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita apoyo técnico y financiero para el Programa de Desarrollo Apícola en la provincia de San Luis. (S.-1.107/90.) Se aprueba. (Pág. 788.)
51. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita se instrumenten mecanismos para prevenir los incendios forestales en la provincia de Misiones. (S.-1.196/90.) Se aprueba. (Pág. 789.)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicita asistencia al servicio de guardabosques de Andalgalá, Catamarca. (S.-1.203/90.) Se aprueba. (Pág. 790.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicita se incluyan controles biológicos y/o químicos para las plagas que afectan la zona denominada **Minada Bolsón del Pipanaco**, en Catamarca. (S.-204/90.) Se aprueba. (Pág. 791.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita la realización de campañas sanitarias en el campo, a través de convenios entre el SENASA y las provincias del Chubut y Santa Cruz. (S.-1.207/90.) Se aprueba. (Pág. 791.)
55. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes sobre los fondos recaudados por el SENASA. (S.-1.299/90.) Se aprueba. (Página 792.)
56. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia, de Educación y de Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación del señor senador Storani y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre la interrupción del funcionamiento del Centro Universitario Devoto. (S.-1.086/90.) Se aprueba. (Pág. 793.)
57. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia, de Educación y de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador Losada y otros señores senadores por el que se expresa preocupación por la ruptura de la continuidad de los estudios en el Centro Universitario Devoto. (S.-1.138/90.) Se aprueba. (Pág. 794.)
58. Consideración del proyecto de ley del señor senador Lafferrière por el que se modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal. (S.-28/91.) (Pág. 795.)
59. Asunto entrado:
XXXVI. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el inciso 1º del artículo 5 del decreto ley 333/58 (Ley Orgánica de la Policía Federal.) (C.D.-1/91.) (Pág. 800.)
60. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión, por el que se sustituye el inciso 1º del artículo 5º del decreto ley 333/58 (Ley Orgánica de la Policía Federal). El señor senador Lafferrière reitera el proyecto a que se refiere el punto 58 de este sumario. (C.D.-1/91.) (Pág. 800.)
61. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor sobre provisión de elementos técnicos para la Policía Federal. (S.-189/91.) (Pág. 809.)
62. Moción de preferencia formulada por el señor senador Gass para que se trate dentro del plazo más breve posible el proyecto de ley del que es autor sobre planificación familiar. (S.-2/90.) Se rechaza. (Pág. 809.)
63. Consideración del proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco por el que se solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 2.733/90.

(Desregulación petrolera) y se reanuda la transferencia de fondos a las provincias. (S.-104/91.) Se aprueba. (Pág. 810.)

64. Consideración del proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicitan informes acerca de las declaraciones del ministro de Asuntos Institucionales de la Intervención Federal en Catamarca. (S.-72/91.) Se aprueba con modificaciones. (Pág. 813.)
65. Manifestaciones de la Presidencia y de varios señores senadores respecto a los temas a tratar. Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 814.)

66. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 815.)

— En Buenos Aires, a las 18 y 22 del miércoles 29 de mayo de 1991:

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda abierta la sesión.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Brasesco). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

I

Acuerdos

Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicitan acuerdos. (P.E.-40 y 41/91.) (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (n° 169) de la Conferencia Internacional del Trabajo. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 23 de mayo de 1991.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El Poder Ejecutivo nacional tiene el agrado de dirigirse a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto el texto auténtico del instrumento internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 76ª reunión, celebrada en Ginebra (Suiza) del 7 al 28 de junio de 1989:

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (número 169).

La constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 19, párrafo 5 y 6, dispone que cada uno de los Estados miembros de la misma se obliga a someter los convenios y recomendaciones adoptados por las distintas conferencias "a la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas".

En orden a ello corresponde señalar la diferencia que existe entre la obligación de someter los convenios y recomendaciones internacionales a la autoridad competente, y la decisión de ratificar los primeros.

Mientras que mediante la sumisión se da a conocer el texto de los citados instrumentos al Poder Legislativo, por la ratificación se asumen obligaciones concretas, destinadas al cumplimiento de las normas convencionales.

Cabe manifestar a vuestra honorabilidad que solamente son materia de ratificación los convenios, en tanto que las recomendaciones se someten al Poder Legislativo con el único propósito de que se adopten, de considerarse procedente, las medidas que se estimen adecuadas para efectivizar los principios orientadores que las mismas contienen.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 972

CARLOS S. MENEM.

Rodolfo A. Díaz. — Guido J. Di Tella.

INFORME COMPLEMENTARIO REFERENTE AL CONVENIO N° 169 SOBRE "PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES"

El documento materia de estudio consta de 10 partes y 44 artículos, tratándose fundamentalmente de un cambio de orientación en el análisis de la problemática indígena, ya que mientras en el Convenio 107 se busca la integración con las diversas comunidades de un país, el nuevo instrumento internacional, aun manteniendo este principio, tiende a la preservación de las costumbres, modo de vida, religiones, lenguas y demás peculiaridades culturales dentro del marco del Estado en que viven, gozando de equivalentes derechos a los de sus conciudadanos.

En el ámbito de nuestra legislación nacional, la ley 23.302 denominada "Ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades", reglamentada por el decreto 155/89, regla la situación jurídica de estas comunidades y sus pautas generales coinciden con los preceptos del convenio, tal como surge del artículo primero del mismo.

Las partes I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del citado instrumento internacional, no difieren de los preceptos de la ley 23.302, ni de la legislación sustancial aplicable en cada una de las materias básicas que aborda, ni tampoco de los principios constitucionales específicos.

por el que se expresa preocupación por la ruptura de la continuidad de los estudios en el Centro Universitario Devoto.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Flombaum). — (Lee):

Dictamen de las comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Interior y Justicia, de Educación y de Derechos y Garantías han considerado el proyecto de declaración del señor senador Losada y otros señores senadores expresando preocupación por la ruptura de la continuidad de estudios en el Centro Universitario Devoto; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.

De acuerdo al artículo 105 del reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 25 de abril de 1991.

Juan R. Aguirre Lanari. — Olijela del Valle Rivas. — Mario A. Losada. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Margarita Malharro de Torres. — Jorge D. Solana. — Adolfo Gass. — Carlos A. Juárez. — Eduardo P. Vaca. — Conrado Storani. — Horacio F. Bravo Herrera. — Edgardo R. M. Grosso. — José A. Romero Feris.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA

I. Expresar su preocupación por la situación planteada en la unidad carcelaria de Devoto que implica de hecho, la ruptura de la continuidad de los estudios que se realizan en el centro universitario de ese penal en convenio con la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, se hace presente la inquietud, ante la insuficiente ponderación de la decisión adoptada que conduce a los afectados a una situación límite de tener que defender sus derechos a costa de su salud.

II. Solicitar la restitución de los detenidos que asisten al C.U.D., a las condiciones de detención imperantes al tiempo de producirse el conflicto.

III. Alentar y ratificar la continuidad de la experiencia del C.U.D. que viene desarrollándose con resultados altamente positivos desde su puesta en vigencia, convalidando así, la declaración adoptada por la Honorable Cámara de Diputados el 7 de febrero de 1991.

Mario A. Losada. — Julio A. Amoedo. — Arturo I. Jiménez Montilla. — Ricardo E. Lafferrière. — Adolfo Gass. — César Mac Karthy. — Alicia A. Saadi. — Héctor J. Velázquez. — Margarita Malharro de Torres. — Conrado Storani. — Jorge D. Solana.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los acontecimientos que tuvieron lugar en la unidad carcelaria de Devoto, resultan altamente preocupantes. La decisión adoptada por las autoridades del citado penal, bien podría encuadrarse dentro de las llamadas "medidas de reestructuración" que consisten en destruir lo que ya existe, con la promesa de reconstruir después, lo cual sólo generó, según queda demostrado, efectos perniciosos.

La movilidad social y política que acompaña la reivindicación del Centro Universitario de Devoto, seguramente volverá a poner dicho centro en funcionamiento, lo que nos coloca en situación de preguntar: ¿Estarán los internos expuestos nuevamente a decisiones de esta característica en otros asuntos?

Un argumento de las autoridades ha sido considerar al grupo de los reclusos estudiantes como beneficiarios de un "privilegio", sin embargo, estos presuntos privilegios derivan del esfuerzo de los propios detenidos, por tanto, lejos de ser tales, implican una sana política de estímulos pudiendo ser la base para un eficiente régimen penitenciario.

Vivimos luchando por una sociedad en la que existan premios y castigos, mal podríamos desalentar los esfuerzos de quienes aspiran a resocializarse a través del estudio y la superación personal.

Además, no puede dejar de considerarse que el proyecto "autogestado" ha sido exitoso y sirve de ejemplo no sólo en nuestro país sino también, para países desarrollados que pretenden llevar el modelo argentino a sus naciones.

Mario A. Losada.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

58

MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA FEDERAL

Sr. Presidente (Brasesco). — Corresponde considerar los temas para los que había preferencias acordadas.

En primer lugar figura el proyecto de ley de modificación de la ley orgánica de la Policía Federal, del que es autor el señor senador Lafferrière.

Sr. Lafferrière. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrère. — Hace ya tres semanas presenté en el Senado un proyecto de reforma al decreto ley 333/58, de Reglamento Orgánico de la Policía Federal, para el cual solicité tratamiento sobre tablas.

Dada la importancia de la iniciativa, la señora senadora por Santa Fe me solicitó que cambiara el pèdido de tratamiento sobre tablas por una preferencia para la sesión siguiente. Interin la Cámara de Diputados sancionó un proyecto sobre el mismo tema, referido a la reforma de la misma norma legal. Y a la semana siguiente, habida cuenta de que la Comisión de Interior y Justicia había comenzado a tratar el tema con diligencia, decidiendo la invitación a funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para contar con mayor información, en ausencia del presidente de dicha comisión solicité que la preferencia pasara para hoy, es decir, una semana después.

La Comisión de Interior y Justicia siguió tratando este tema, y ya llegó la sanción de la Cámara de Diputados a la que hice referencia al comienzo de mi exposición.

Creo que el proyecto que tenemos en consideración, señor presidente, tiene una profunda trascendencia, porque si bien no abarca en su totalidad los hechos que motivaron la redacción del proyecto de mi autoría, creo que alcanza a dar pasos en la dirección correcta para armonizar la necesidad de la seguridad ciudadana con la de las personas; ambos son objetivos fundamentales del orden jurídico e institucional del país.

Recordemos que la sociedad entera se sensibilizó por la muerte del joven Walter Bulacio, acaecida luego de una defensión por averiguación de antecedentes realizada por la Policía Federal, y de cuya personalidad hemos podido tener conocimiento varios senadores que recibimos a su señora madre. En esa oportunidad tuvimos ocasión de adentrarnos en todo el drama que implica para un ciudadano común de nuestra patria, un habitante de nuestro país, tener que lidiar con el poder sintiéndose impotente e indefenso.

Comprendo que avanzar en una reforma de esta naturaleza puede provocar preocupación; pero como lo señalé el día que solicité el tratamiento sobre tablas del proyecto del que soy autor, venciendo este recelo debemos comprender que nuestra obligación no reside sólo en profundizar la democracia del poder sino en tratar de integrarla en el funcionamiento social con la democracia de los ciudadanos. Es decir, no sólo debe tenerse en cuenta la segunda parte de la Constitución, que establece cuáles son las

atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los gobernadores de provincia y cómo se sancionan las leyes, sino que debemos recordar que esa segunda parte se justifica en función de la primera, que es la que dice que los argentinos hemos decidido organizarnos como país para defender los derechos básicos de nuestro territorio y de los ciudadanos de nuestra Nación.

Por eso, señor presidente, creo que el paso que daremos hoy será trascendente. Seguramente el hecho de que tratemos el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados no nos dejará totalmente conformes y satisfechos. Particularmente me parece que achicamos quizás en demasía lo que tendría que ser una meta mayor y más grande: rodear al habitante argentino, al compatriota, de un haz de seguridad que lo deje indemne frente a los desbordes o exageraciones del poder, con el que muchas veces nosotros mismos tenemos que lidiar.

No quiero que en la Argentina existan enfrentamientos entre la policía y nuestro pueblo. No quiero, señor presidente, como senador de la Nación, que la policía sea vista con recelo por nuestros compatriotas. Tampoco quiero que ocurra lo que sucede muchas veces cuando se detiene un patrullero al lado de un ciudadano común que camina por la calle; es decir que en lugar de generar una sensación de seguridad, tranquilidad y alegría provoca un estado de inseguridad y temor. Porque esto no sólo daña a la policía sino también a la sociedad; e invirtiendo los términos, daña a la sociedad y también a la policía.

Si nosotros aceptamos la existencia de facultades omnímodas provenientes de la esfera del poder que impliquen que toda la sociedad sea colocada en estado de sospecha por parte de la policía, se da la ecuación inversa de que toda la policía es colocada en estado de sospecha por parte de la sociedad. Así, en lugar de encontrar una alianza natural y fuerte entre el pueblo y la policía para defender al primero ante el delito, estamos abriendo el camino para que se forme una alianza tácita entre el pueblo y a veces el delito para defenderse de la policía, como si ésta fuera el enemigo.

El otro día señalé que me sentía orgulloso como funcionario del Estado cada vez que por televisión veía que la Policía Federal, así como las provinciales, la Prefectura o la Gendarmería desbarataban bandas de delincuentes y de narcotraficantes. Pero también decía que sentía hervir la sangre de indignación cuando veía que el poder del uniforme estaba violando algún derecho de un habitante pacífico de nuestro país.

No sé si estaremos en condiciones de dar lugar en nuestra legislación al moderno derecho del anonimato, que está avanzando rápidamente en la legislación de los países desarrollados, para dar seguridad al ciudadano que no molesta a nadie para que pueda transitar libremente por las calles cuando no comete un delito o una falta, sin tener que estar mostrando el documento para decir quién es, por el solo hecho de ser habitante de nuestro territorio.

Pero de lo que sí estoy seguro es de que si todavía no estamos en condiciones de darle al ciudadano el derecho al anonimato, si lo estamos para darle el derecho a la libertad y a su seguridad personal, a ser respetado en su libertad de ser hombre, mujer o niño frente a cualquier desborde del poder o de la autoridad.

Este proyecto que viene de Diputados trata de fijar un justo medio: no le quita a la policía las facultades de detención, como es el temor de algunos comisarios o de otros funcionarios que de buena fe creen que la policía debe tener esta capacidad preventiva de detener para identificar, pero se le da al ciudadano el resguardo de que cuando es detenido se debe dar noticia al juez aunque más no sea.

El señor senador por Corrientes presidente de la Comisión de Interior y Justicia me hacía notar que en este intenso trabajo de la comisión había receptado algunas inquietudes de magistrados, que seguramente expondrá para mejorar este texto que ha venido de la Cámara de Diputados. Tengo interés en participar en el estudio de una reforma integral del decreto ley número 333, porque creo que tenemos que adecuarlo a los tiempos modernos, a los días que corren.

Sin embargo, creo que en algunas oportunidades lo bueno es enemigo de lo mejor y que en este momento nosotros haríamos bien en sancionar este proyecto y darnos el compromiso, que en lo personal asumo, de un estudio mucho más profundo, consultando a profesionales del derecho, funcionarios de la policía, funcionarios de seguridad y a mayor cantidad de magistrados, docentes y académicos; que permitan realizar una reforma integral del decreto ley número 333, en el marco de la ley de seguridad interior. Es decir en el ámbito de una reforma de este decreto ley que armonice la relación de la policía con los habitantes de la Nación Argentina.

Desgraciadamente estamos sensibilizados por un hecho muy triste, que por otra parte lleva a algunos sectores contestatarios de nuestra sociedad a esparcir un sentimiento antipolicial.

No quiero que mis palabras sean consideradas como un alegato contra la policía sino en todo caso como una necesidad de defender a la policía y a los ciudadanos de los malos policías.

Estoy de acuerdo con que la policía debe tener herramientas para poder custodiar los derechos de los ciudadanos; pero creo que ellas no pueden ser indiscriminadas de manera que abran grietas por donde pueda colarse el autoritarismo. Así como hay una enorme mayoría de policías honestos, frente a los cuales nos sacamos el sombrero, frente a los que incluso tenemos que rendir tributo por la sangre derramada en la lucha contra la delincuencia, también nos encontramos con los malos policías que todos sabemos que existen aunque no podamos probarlo, porque sabemos de las tarifas existentes según sea el nivel del colegio en que estudia un joven, del pedido de coima para liberarlo cuando se le detiene un viernes.

Sabemos también de las humillaciones a las que son sometidos algunos detenidos que no tienen la posibilidad de comunicarse inmediatamente con su familia o con conocidos, y lo mismo ocurre con las veinticuatro horas que fija la ley orgánica de la policía, las que muchas veces empiezan a correr desde el momento en que alguien se interesa por el detenido y no desde cuando realmente ingresó.

Por eso creo, como un acto de respeto al orden público, a los ciudadanos y a la policía, que tenemos que integrar nuestra legislación para que la protección contra la delincuencia que tenemos que darle a los ciudadanos también esté rodeada de garantías a la seguridad jurídica, a la integridad y a la dignidad de los habitantes de nuestro país.

Por ello, señor presidente, utilizando la preferencia que el Senado tuvo la deferencia de aprobar, solicito que este proyecto que viene de la Cámara de Diputados sea aprobado tal cual está, sin perjuicio de que empecemos a analizar futuras correcciones, a los efectos de que el país tenga la buena nueva de una ley sancionada en el sentido correcto. Seguramente este proyecto no colmará las expectativas de todos y dejará a algunos disconformes, pero implica un paso adelante en la integración de esta democracia del poder que nos ha tenido bastante entretenidos en estos siete años. El proyecto hace a la democracia de los ciudadanos, que es la justificación —incluso— de nuestra propia presencia en el Senado y de la misma existencia del orden jurídico argentino.

Sra. Malharro de Torres. — ¡Muy bien!

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: ayer, como lo acaba de expresar el señor senador Lafferrière, las comisiones de Interior y Justicia que preside y de Derechos y Garantías, que preside el señor senador Losada, tuvieron una prolongada reunión con distinguidos jueces de la Capital y también con el ministro del Interior, quien concurrió a rendir un informe acompañado por miembros de la Policía Federal Argentina. Dicha reunión fue la continuación de otra anterior realizada por las comisiones con la presencia del señor senador Lafferrière, autor de un proyecto que toda la Cámara conoce.

Hemos tomado con toda diligencia y responsabilidad el grave asunto que la Cámara nos encomendó a los efectos de producir el dictamen consiguiente.

Me veo obligado a manifestar ciertas cuestiones especiales que explicarán la falencia que puede tener mi exposición, que realmente es improvisada. Además, quiero expresar que voy a fundamentar alguna proposición de reforma que no es precisamente el reflejo de una circunstancia personal sino la traducción de algo acerca de lo cual creí que en la reunión de ayer, había existido consenso entre los senadores presente.

Ayer tuvo lugar la reunión de presidentes de bloque. Aun cuando se había establecido la preferencia, entendí que la discusión del tema no la haríamos esta semana sino en la próxima. Mi intención — así se lo había comunicado a otros colegas — era la de no quedarme solamente con la opinión "de dos patas de la mesa" — puesto que posiblemente sean más de tres o cuatro —; como son la de los magistrados por un lado, y la del Poder Ejecutivo y concretamente la Policía Federal por el otro. También me interesaba, en tren de estudiar exhaustivamente el tema — como lo hizo la Cámara de Diputados, que tuvo varios meses para hacer consultas —, que pudiésemos realizar las gestiones pertinentes ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Digo esto porque ellos son precisamente auxiliares de la justicia y pueden dar testimonio de muchas circunstancias que también es conveniente que nosotros conozcamos. Pero al llegar a esta Cámara, luego de un viaje que hice a mi provincia, me enteré de que había decisión de los bloques — que respeto — de tratar este proyecto sin nuevas dilaciones. Me someto a lo acordado, pero simplemente invoco lo que acabo de manifestar que es de conocimiento de los señores

senadores que intervinieron en la reunión de ayer. Lo hago para explicar las falencias que va a tener mi exposición, que por otra arte no aportará mayores luces porque creo que los hechos son conocidos, por lo menos por parte de aquellos senadores que tuvieron el interés de cumplir con su función de miembros de las comisiones respectivas.

Ayer citamos a varios jueces para tratar el tema y para escuchar sus consideraciones sobre la sanción que aprobó la Cámara de Diputados. Quiero dejar constancia de que esto no significaba de ningún modo un desmerecimiento del proyecto que oportunamente presentó un colega nuestro en el Senado. En realidad ya lo consulté privadamente al respecto, y creo que también lo hicieron otros señores senadores; había un tácito acuerdo para evitar nuevos esfuerzos, y sin perjuicios de que fuera perfectible se tomara como base de discusión la sanción de la Cámara de Diputados. Fue sobre esta sanción que requerimos su opinión a los miembros de la judicatura que concurrieron a la reunión de comisión a la que fueron invitados.

Acá hay dos elementos en juego que por supuesto nos preocupan a todos. Por un lado, y como bien se ha puesto de manifiesto, está la seguridad individual de los ciudadanos, que han tenido que sufrir más de una vez circunstancias ingratas y lesivas como consecuencia de la acción de funcionarios que no respetan debidamente el derecho individual de las personas.

Por otro lado está en juego un elemento al que nadie puede ser ajeno, que es la seguridad de la sociedad, que le exige a la policía eficacia en sus procedimientos frente al auge de la delincuencia, que se ha agudizado en los últimos tiempos como consecuencia de delitos que son de público conocimiento.

El proyecto que se consideró ayer en esa reunión y que ahora trata esta Cámara mereció en general apoyo, tanto por parte de los jueces — con alguna salvedad que voy a indicar luego — como incluso de la propia Policía Federal. Sin embargo me siento en la obligación de destacar que ésta nos expresó su inquietud respecto al lapso después del cual, se consigna la identificación o no, debe dejarse en libertad a aquellos detenidos que habían sido detenidos para averiguación de antecedentes. La inquietud se basaba en la circunstancia de que podría ocurrir, como consecuencia de la acumulación de trabajo que se suele dar en ciertos días, que la policía no pudiera proceder a la identificación dentro del lapso de diez horas que se le ha fijado. Esto es consecuencia principalmente de que en este mo-

mento la policía carece de los elementos técnicos necesarios para proceder con la urgencia del caso.

La doctora Servini de Cubría nos recordaba algo que yo a mi vez recordaba haber leído en su exposición el año pasado en la Cámara de Diputados. Ella había estado en una oportunidad en una dependencia policial desde la diez de la noche hasta las seis de la mañana para que se le informase sobre la identidad de una serie de jóvenes que habían sido detenidos en una circunstancia que, según nos decían los miembros de la Policía Federal, es bastante frecuente como consecuencia de ciertas avalanchas que se producen a veces en espectáculos de tipo juvenil. El problema es que a raíz de que existen fallas por falta de elementos en el sistema Digicom que emplea la Policía Federal, no se puede actuar con la celeridad necesaria. Esto quedó asentado en la Cámara de Diputados y originó un proyecto de comunicación de mi autoría que solicito a mis colegas que sea sancionado si es posible en esta misma sesión. Por este proyecto de comunicación se pide que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tome los recaudos necesarios para proveer a la policía de los elementos técnicos que faltan para reparar el sistema Digicom o para que disponga de un sistema computarizado que cumpla con las mismas funciones que aquel.

Quiero informar también a la Cámara que en su visita de ayer el ministro del Interior nos hizo saber que está adelantado el trámite de una negociación a fin de obtener elementos de origen francés de muy alta tecnología que permitirían dar mayor rapidez a este proceso de identificación.

Estas son las circunstancias que yo quería hacer conocer a la Cámara. La última es una sugerencia que nos hicieron los señores jueces que concurrieron ayer al Senado y que se declararon muy reconocidos por el hecho de que el cuerpo los hubiera llamado para conocer su opinión con respecto al proyecto que estamos considerando.

Este proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados y que ha ingresado hoy dice lo siguiente:

Artículo 1º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 5º del decreto ley 333/58, ratificado por la ley 14.467, por el siguiente:

Inciso 1º: Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, en circunstancias debi-

damente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer algún hecho delictivo o contravenacional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, en que en ningún caso podrá exceder de diez horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones.

Como pueden apreciar los señores senadores, el proyecto dice que la persona podrá ser conducida a la dependencia policial que correspondiese con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno. Los señores jueces nos sugirieron que, en atención a los derechos individuales que están en juego, y a fin de facilitar la propia tarea de la policía, liberándola de la identificación correspondiente, se reemplazará la expresión "con noticia al juez" por "en consulta al juez".

¿Qué diferencia existe entre ambas expresiones? Es bastante importante. La policía que detiene y retiene durante diez horas a quienes están sospechados de la comisión de algún hecho delictivo simplemente cumple con hacerle saber al juez, es decir "con noticia al juez". Pero si se dice "en consulta con el juez", se está autorizando a éste para que —examinando la causa concreta y considerando el conocimiento que todo juez tiene de circunstancias que se van repitiendo— pueda disponer allí mismo antes de diez horas, la libertad de aquellos respecto de los cuales considera que no existe mérito para la demora que estén sufriendo.

Esta es la sugerencia que ayer nos hicieron llegar los jueces que nos visitaron. Me creo obligado a plantearla aquí y lo hago con convicción. Por ello, propongo que la Cámara, en la consideración en particular, reciba esta inquietud.

Por estas circunstancias y con el ánimo de no dilatar el tratamiento de este asunto, que ha sido suficientemente explicitado por el señor senador Lafferrière, adhiero en general al proyecto, sin perjuicio de pedir a mis colegas que en beneficio del interés general, de los intereses individuales, y para facilitar la acción responsable de la policía —que no debe verse de ninguna manera cuestionada ni desestimada por esta sanción—,

también aprobemos la comunicación al Poder Ejecutivo para que con la urgencia del caso se arbitren los fondos que permitan la identificación de aquellos que hayan sido demorados por la policía.

Finalmente debo decir que he fundamentado de manera incompleta el proyecto que estamos considerando, puesto que en verdad creí que iba a ser tratado en la próxima semana. Por ello, hubiera deseado reunir algunos otros elementos que andan desperdigados por allí; incluso, hubiera querido leer las versiones taquigráficas de las reuniones que hemos realizado al analizar este asunto.

De cualquier modo, reitero mi adhesión en general.

Sr. Presidente (Brasesco). — El señor senador Lafferrière, con motivo del tratamiento preferencial que se había acordado para este proyecto, ha solicitado su aprobación.

Sin perjuicio de ello, la Presidencia ha tomado conocimiento de que ha entrado al cuerpo en estos momentos la sanción de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley relacionado directamente con el asunto que estábamos considerando.

En consecuencia, se ha solicitado que esta preferencia se vincule con la sanción de la Cámara de Diputados a que acabo de hacer mención.

59

ASUNTO ENTRADO

Sr. Presidente (Brasesco). — En razón de lo que se acaba de indicar, si hay asentimiento de la Honorable Cámara, la Presidencia dará entrada a la sanción de la Cámara de Diputados relacionada con el tema que se estaba tratando.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Brasesco). — Como hay asentimiento, se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

XXXVI

Modificación de la Ley Orgánica de la Policía Federal en cuanto a la detención de personas. — Proyecto de ley en revisión

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 5º del decreto ley 333/58, ratificado por la ley 14.467, por el siguiente:

Inciso 1º: Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no

podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en algún caso podrá exceder de diez horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Brasesco). — Este asunto es enviado a las comisiones de Derechos y Garantías y de Interior y Justicia.

60

MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIAL FEDERAL (continuación)

Sra. Saadi de Dentone. — Señor presidente: pedimos el tratamiento sobre tablas de este asunto.

Sr. Lafferrière. — Pido la palabra.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra, el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: para cumplir adecuadamente con los ritos de la solemnidad, solicito que este asunto sea tratado como un despacho de comisión y que así se vote, haciendo el debate sobre el texto que acaba de ser leído.

Sr. Presidente (Brasesco). — ¿Es una moción de orden?

Sr. Jiménez Montilla. — Pido la palabra.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Primero había solicitado el uso de la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Si el señor senador por San Luis ha solicitado la palabra para plantear una cuestión reglamentaria, se la cedo con mucho gusto al presidente del bloque justicialista.

Sr. Rodríguez Saá. — Así es, señor senador.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Nuestro bloque todavía no había logrado un acuerdo sobre el proyecto del señor senador Lafferrière.

De cualquier manera, entiendo que hay acuerdo en tratar y aprobar la sanción de la Cámara de Diputados, procedimiento que también parece aceptar el señor senador por Entre Ríos.

En consecuencia, hemos improvisado una reunión en nuestro bloque y estamos en condiciones de apoyar el tratamiento sobre tablas de la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Brasesco). — ¿Debo interpretar que usted ha formulado una moción de tratamiento sobre tablas para considerar la sanción de la Cámara de Diputados que acaba de ser leída por Secretaría?

Sr. Rodríguez Saá. — Así lo he expresado, señor presidente.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consecuencia, se va a votar la moción formulada por el señor senador por San Luis.

Luego de la votación, continuará la lista de oradores.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — El resultado afirmativo fue por unanimidad.

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Quiero hacer conocer públicamente la tarea desempeñada con relación a este tema por la comisión cabecera que lo ha estudiado. Me refiero a la comisión que preside el señor senador Aguirre Lanari y a los estudios que ha hecho respecto del proyecto de ley del señor senador Lafferrière.

Se realizaron consultas y se buscó que ese proyecto, que es de enorme importancia, tuviera la participación de los distintos sectores.

Tal como lo señaló el señor senador Aguirre Lanari, en las últimas semanas hemos asistido a distintos encuentros en donde nos hemos enriquecido y recibido las distintas argumentaciones vinculadas con este tema. Naturalmente es nuestra responsabilidad la de legislar en salvaguarda de los intereses individuales y de la sociedad en su conjunto.

En virtud de que hoy tenemos la posibilidad de considerar un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, cuya sanción permitirá avanzar en esta temática, y habiendo hecho consultas aquí en el recinto con los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías, que tengo el honor de presidir, señalo que coincidimos y apoyamos la modificación que solicita el autor del proyecto.

No obstante queremos dejar bien en claro, por respeto a quienes hemos consultado —poniendo mucho énfasis en hacer las correspondientes aclaraciones a todos los que han tenido la voluntad de concurrir al Senado para brindar su opinión al respecto—, que no debe ser considerado como un acto de descortesía el hecho de que se sancione un proyecto que no expresa de alguna forma las opiniones de quienes han sido consultados.

Por consiguiente apoyo la iniciativa de la Cámara de Diputados, dejando bien a salvo que esto no se agota con la votación a realizarse. Por el contrario, asumimos el compromiso de buscar un proyecto que perfeccione esto y que realmente resulte una síntesis de todas las opiniones que hemos escuchado y las que se sigan vertiendo al respecto.

Hago esta aclaración a fin de que quede a salvo la honorabilidad de la presidencia de la Comisión de Interior y Justicia, que fue la encargada de realizar las convocatorias. De manera que podrán efectuarse las aclaraciones del caso a los convocados oportunamente.

Asimismo todos los senadores tendremos la tranquilidad de haber señalado que con esta sanción no estamos absolutamente satisfechos, ni que lo que estamos aprobando sea lo ideal.

Coincidió en un aspecto puntual, como señalara el senador Aguirre Lanari, respecto de la consulta y de la noticia al juez. Es una cuestión de enorme importancia y que marca grandes diferencias.

Por eso, la comisión que presido apoya el tratamiento del proyecto venido de la Cámara de Diputados, con el compromiso de discutir en lo inmediato un proyecto más abarcativo.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Jiménez Montilla. — Como miembro de la Comisión de Derechos y Garantías, en cuyo seno ya hice sentir mi opinión, y como integrante del bloque justicialista, quiero decir que las expresiones, vehementes pero correctas y ajustadas a la verdad del señor senador por Entre Ríos, nos han dado una visión completa de la situación. Se trata de una verdad sobre la que debemos mantenernos alertas para que no pase mucho tiempo sin que podamos brindar los instrumentos necesarios, no sólo para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con la necesaria adecuación a las necesidades a las que están sometidas, sino también para garantizar y resguardar la libertad individual de los ciudadanos que viven en la República Argentina.

Señor presidente: debo manifestar al señor senador por Entre Ríos mis profundas dudas sobre el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Estas dudas radican en que las normas deben ser objetivas, claras y precisas para poder demarcar con eficiencia la actuación y actividad de cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad. En el caso que estamos considerando hoy, existen algunas expresiones que siembran dudas y nos obligan a pensar que hay debilidades dentro de esta norma que no nos permitirán vivir con la tranquilidad a que aspiramos y deseamos.

De cualquier forma, hemos convenido —en esto estamos contestes todos los señores senadores— que al sancionar esta disposición aprobada por la Cámara de Diputados abrimos una senda para entrar de inmediato en el estudio en profundidad de este problema, lo que nos permitirá dotar a nuestro país de las herramientas necesarias para que las fuerzas de seguridad, que deben resguardar y custodiar los bienes de cualquier naturaleza de la República, puedan actuar en beneficio de los argentinos con la eficiencia, suficiencia y garantía que requiere el pueblo.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: deseo expresar nuestra adhesión al proyecto que estamos considerando.

En su momento también solicité el uso de la palabra para expresar nuestra adhesión respecto del tratamiento sobre tablas de esta iniciativa, lo que ya ha sido aprobado.

La Constitución de nuestra provincia, sancionada en 1986, también terminó con esta vieja costumbre de la detención en averiguación de antecedentes, estableciendo que toda orden de detención debe emanar de juez competente, salvo los casos de excepción, *in fraganti* y demás establecidos por los códigos de procedimiento.

En momentos en que como constituyentes debatíamos el tema, esta garantía generó profundas dudas acerca de la posibilidad de desprotección de la sociedad al quitársele a la policía, que ya no tenía los elementos suficientes para actuar con rapidez y diligencia en la identificación de las personas, las facultades de que antes disponía, lo cual podría ofrecer ciertas ventajas a la delincuencia. Pero estas preocupaciones eran infundadas.

La vigencia de la Constitución y el cumplimiento de esas normas de protección de las garantías de los ciudadanos no han traído dificultades.

Ha habido sí un tiempo de adecuación de las normas y procedimientos policiales para actuar dentro de los marcos legales y constitucionales.

Por estas razones, entiendo que la norma que vamos a sancionar constituye un positivo avance en favor de los derechos individuales y de la ciudadanía.

Quizá con el tiempo lleguemos incluso a eliminar este plazo de diez horas que hoy estamos fijando. Pero creo que es una solución de transición, un elemento útil que permitirá garantizar las libertades individuales sin generar preocupación en la población respecto de la seguridad de bienes y personas.

Por estas razones, señor presidente, adelanto nuestro voto afirmativo a la sanción del proyecto. Al mismo tiempo, creo que es útil la propuesta formulada por el señor senador por Corrientes de que sea el juez quien decida, al efectuársele la consulta, si es necesario mantener la detención o no.

Pienso que de esta manera se puede introducir una mejora, y en este sentido brindo mi respaldo.

El señor senador por Corrientes también mencionó un tema por el que, según he advertido, varios señores senadores se han preocupado y han presentado proyectos de comunicación. Al respecto, mi bancada también va a presentar una iniciativa referida a la tecnología importada para la identificación de personas, como lo ha anticipado el ministro del Interior.

No quiero introducir este tema de rondón, pero creo que debemos analizarlo con mucho cuidado.

En el país hay tecnología y empresas que están en condiciones de cumplir esa tarea. Se trata de un tema que debemos analizar.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanarfi. — Señor presidente: quiero que se deje constancia de que apruebo el tratamiento sobre tablas y el proyecto en general; pero, en oportunidad del tratamiento en particular, insistiré en la propuesta de modificación que he efectuado y que coincide con sugerencias de gente experimentada, como son los propios jueces.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: después de haber escuchado a los representantes de los

distintos bloques, creo que el Senado está a punto de convertir en ley un proyecto de profunda trascendencia.

Pienso no cometer una sobrevaloración si expreso que la correspondiente sanción es esperada por gran parte de la sociedad argentina.

El señor senador por Corrientes ha tenido un exceso de modestia al expresar que no ha podido traer la totalidad de las argumentaciones ni venir preparado a este debate. Su intervención desmiente su propia afirmación. Debo decir, reiterando lo dicho en mi exposición anterior, que coincido medularmente con su posición en cuanto al tema de fondo. A tal punto es así que el proyecto originario apuntaba a que esta facultad fuera directamente erradicada de la legislación argentina.

Se trata, señor presidente, de una facultad absurda desde el punto de vista del orden institucional, qué tiene el centro del orden jurídico en las personas y que no es comprensible para juristas de países democráticos. No es utilizada por la enorme mayoría de los países del mundo que tienen un sistema institucional basado en la libertad de las personas. Incluso la sanción de este proyecto tendrá un carácter docente hasta para con la propia policía.

Uno de los jueces consultados con motivo del tratamiento de esta iniciativa en la Cámara de Diputados decía que era sumamente perverso el efecto de esta norma en la propia mentalidad policial. Y al respecto comentó que en una oportunidad en que concurrió a la policía se encontró con una serie de detenidos en averiguación de antecedentes. Cuando le preguntó al oficial a cargo por qué esas personas estaban detenidas, le contestó que era porque no tenían documentos. El juez le preguntó si habían cometido algún delito, a lo que el oficial le contestó que no. Es decir que el propio oficial consideraba que el hecho de no tener documento constituía motivo suficiente para generar una detención.

Esto es herencia de aquellas viejas épocas cuando la ciencia de la represión del delito venía de la mano de una vocación represiva en general, cuando no se concebía la represión selectiva, la investigación precisa, la investigación criminológica determinada frente a los causantes o a los autores de un determinado hecho delictivo o contravencional y cuando parecía lícito obrar al voleo —valga el vulgarismo—, como tirando la red cuando se va a pescar, para ver si se podía encontrar a alguien que tuviera vinculación con algún procedimiento delictivo.

Resulta que el muestreo hecho por algunos damnificados por procedimientos de esta naturaleza demostró que no llega al uno por ciento la cantidad de casos en los que los detenidos por averiguación de antecedentes tienen alguna vinculación con algún hecho delictivo. Mientras tanto, se está perpetuando una situación —como la describí hace un rato— de alejamiento espiritual entre el pueblo y la policía porque un ciudadano común tiene temor por todo lo que trae consigo una detención. Me refiero al temor individual que, como lo señalan los psicólogos, acompaña psicológicamente al individuo toda la vida luego de que ha sido detenido. No se trata de las 3, 5, 12, 24 o 48 horas que dura la detención, sino que sus efectos son permanentes.

Debemos considerar también el estigma ante la familia. Una persona que ha estado detenida, ante sus hijos, parientes y familiares, estuvo preso. También está el estigma social, que quizá sea más notable en nuestros pueblos chicos, cuando alguien estuvo detenido es como si hubiera perdido algo de su honorabilidad, como si hubiera sido sospechoso. Esto también implica una marca que acompaña al individuo durante toda su vida.

Estos son elementos que debemos contemplar porque implican una renovación en nuestra manera de ver el mundo, una apertura y una frescura —si se quiere— a la convivencia y a la tolerancia.

Con motivo de la elaboración de este proyecto tuve oportunidad de consultar la jurisprudencia existente al respecto. Está la doctrina que sostiene tenazmente la inconstitucionalidad de una atribución dada de esta forma al poder administrador.

Nos encontramos frente al contrasentido de que cuando la policía investiga un delito o detiene a un delincuente *in fraganti* tiene la obligación de dar inmediatamente conocimiento al juez competente. Pero cuando detiene a una persona que no está cometiendo un delito, ni falta ni contravención alguna, de acuerdo con la ley vigente puede tenerlo hasta veinticuatro horas sin decírselo a nadie. Insisto en el tema de que en algunos casos se da el agravante de que existen corruptelas en algunos malos policías, pues comienzan a contar las veinticuatro horas a partir del momento en que alguien se interioriza por el detenido y no desde el momento en que el mismo ingresó en la comisaría, es decir, desde el instante en que dicha persona ha sido privada de su libertad.

Por otra parte, no quiero cargar las tintas sobre la policía porque estas leyes son expresión del estado cultural de la sociedad; no son dictadas por la policía sino por el Parlamento.

El decreto ley que estableció la ley orgánica de la Policía Federal fue dictado durante un proceso militar: el de la Revolución Libertadora. Incluso debo decir con dolor que fueron hombres que pertenecían a mi partido quienes firmaron en su momento como funcionarios la sanción de dicho decreto ley. Pero también es cierto que dicho decreto modificó una ley anterior que permitía a la Policía Federal tener detenida a una persona hasta diez días por averiguación de antecedentes. A partir de 1958 se establecieron veinticuatro horas. Creo que en realidad una persona no debería estar ni un minuto privada de su libertad, salvo que se la detenga *in fraganti* delito o que la detención sea ordenada, como dice la Constitución, por un juez competente.

Insisto en que este proyecto da un paso adelante en este sentido. Valoro la posición esgrimida por el señor senador por Corrientes cuando se refirió a que la detención deber ser en consulta con el juez competente y no con noticia de la misma.

Sr. Aguirre Lanari. — No sólo es mi opinión sino que recogí la de los jueces...

Sr. Lafferrière. — ...de nuestra organización judicial.

También es cierto, señor presidente, como lo señalé recién, que el estado cultural que dio origen a leyes que los argentinos aprobamos en determinadas épocas de nuestra historia también se basaba en una concepción represiva casi lombrosiana que daba lugar a edictos policiales.

El otro día, en una reunión de comisión, tuve oportunidad de leer un interesante fallo de la cámara de Rosario que declaraba inconstitucional la detención de las personas por el delito de vagancia porque la caracterización de "vago" es tan abierta y genérica que realmente contradice los principios fundamentales del ordenamiento jurídico argentino. Incluso dice que puede ser detenido el profesional del delito. Esto significaba que se estaba tomando como incriminante una característica absolutamente subjetiva en donde se establecía, por ejemplo, que los sujetos conocidos como profesionales del delito, que se encontraban merodeando por los muelles, estaciones ferroviarias o de tranvías, bancos, paradas de ómnibus, hoteles, teatros, cines o cualquier lugar de reunión o asamblea públicos, sin causa justificada, eran susceptibles de sufrir desde

La Cámara Federal en este caso establece que el "ser algo" no implica una conducta incriminante. Si a lo que se está refiriendo es a la reincidencia, hay una figura legal específica que alude a la misma y le aplica un tipo penal. Si se refiere a la comisión de un hecho delictivo específico, existen hechos tipificados como tales que también tienen una sanción penal.

Si se está refiriendo a alguien que ya ha estado detenido, ya saldó su deuda con la sociedad, al haber cumplido la sanción, y no puede estar agregándosele por un edicto policial un estigma mayor al que ya lleva consigo por la aplicación de una ley penal después de una sentencia judicial.

Por lo tanto es una actitud absolutamente inconstitucional caracterizar mediante "ser algo" en lugar de "cometer algo", que es la base del derecho penal positivo y que nosotros tenemos que seguir perfeccionando.

Es por eso, señor presidente, que considero muy útil esta sanción, aunque no nos animemos —porque también debemos decirlo con puntual claridad— a avanzar hacia el fondo y derogar una facultad que contradice principios constitucionales básicos.

Creo que también es importante el compromiso que debemos asumir, tomando estas reflexiones que nos han hecho llegar los señores magistrados.

Está clara la expresión del señor senador por Tucumán y la dedicación al trabajo que han demostrado las comisiones de Interior y Justicia y de Derechos y Garantías en cuanto a que debemos hacer una reforma integral de la Ley Orgánica de la Policía. Pero no demoremos la sanción de este proyecto de ley que quizás en un nivel que tenga como objetivo cien, llegue tan sólo a cincuenta, pero en el caso de no aprobarlo nos quedaríamos en cero. Tomemos ese 50 por ciento, ocupemos ese espacio, hagamos docencia y que los ciudadanos sepan que tienen un haz de derechos que los protege y que la vida en libertad es la democracia de los ciudadanos.

De ahí en más comencemos un estudio más profundo y detallado sobre la legislación vigente, en particular sobre la Ley Orgánica de la Policía, que nos ponga más a tono con la época y la evolución de la legislación penal.

Por eso voy a insistir en la sanción de este proyecto en general y en particular, tal como viene de Diputados, para que podamos tener hoy esa ley, sin perjuicio de continuar los estudios y elaborar mejores normas que legislen sobre el tema.

Sr. Presidente (Brasesco). — Antes de darle la palabra al siguiente orador, la Presidencia hace la advertencia de que al haberse sustituido el proyecto del señor senador Lafferrière, que tenía preferencia, por la sanción de la Cámara de Diputados, la iniciativa del señor senador por Entre Ríos vuelve a comisión, donde los señores senadores podrán elaborar las propuestas que en este momento están haciendo.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — A pesar de haber escuchado los valiosos aportes de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, no quiero dejar de emitir mi opinión en un tema tan importante para los ciudadanos como es la libertad, que constituye uno de los derechos indispensables para una sociedad civilizada.

La Argentina sin duda arrastra un bagaje totalitario que viene de la época en que nuestros paisanos, los gauchos, eran perseguidos por considerárselos vagos. Luego vino la etapa represiva caracterizada por una conducta totalitaria no sólo de quien tuvo que ejercerla —las fuerzas de seguridad— sino también en ocasiones de la propia sociedad, que reclamaba la adopción de este tipo de medidas, sin comprender que a veces es preferible demorarse en descubrir un delito, retrasarse por buscar otros procedimientos que no sean represivos, pero preservar la libertad, los derechos de aquellos que son inocentes y que también son la mayoría.

En el seno de la comisión dijeron miembros de la policía que ésta era una herramienta que necesitaban. Creo que con el tiempo van a comprender que existen otras más modernas, tanto para investigar y prevenir como aun para reprimir los delitos. Tampoco necesitamos un sistema sofisticado de tarjetas de identificación con memoria magnética para que en el patrullero policial sepan quién es cada uno al ser detenido.

Creo que esa tampoco es la solución. Muchos países más desarrollados, con mayor cantidad de habitantes que el nuestro, mantienen el sistema de libertad ambulatoria de las personas, las que no están obligadas a portar ningún documento. Esto es revertir la presunción de inocencia, cosa que no debemos aceptar.

La sanción de la Cámara de Diputados contempla en parte nuestra inquietud, aunque nos hubiera gustado que no existiera esta facultad.

También deseamos que las provincias adhieran a esta normativa y que sus normas policiales vayan contemplando esta situación. Algo va se avanzó con respecto a la libertad de las personas en la constitución de Salta, que fue apro-

bada en 1986. Ella tiene un artículo muy extenso que prevé, entre otras cosas, que todo detenido debe ser notificado en el acta de la detención, en forma comprensible y fehaciente, de las causas de la misma, correspondiéndole al juez competente ordenar un examen psico-físico del detenido. Esta es una de las normas por las que se protege la libertad personal.

Por otro lado, como resabio totalitario está la formación de nuestra policía, que durante mucho tiempo fue asimilada a la formación del personal militar. La diferencia es que resulta lógico que el personal militar tenga como oponente al enemigo, que debe ser eliminado. Esto sin duda es parte de la formación militar, no reprochable porque así debe ser. Por eso es comprensible que dicho personal no sea involucrado en asuntos internos.

Lo que pasa es que la policía a veces fue conducida durante mucho tiempo por oficiales de las fuerzas armadas, por lo que recibió una instrucción casi militar. Entonces, equivocadamente se convierte a cada ciudadano en un oponente y enemigo de la policía, no viéndose en cada uno de sus integrantes a una persona que sirve para ayudar, proteger y prevenir, con lo cual se genera una repulsa generalizada como la que a veces existe contra la autoridad policial. Esto ocurre sin tener en cuenta que muchos, la gran mayoría, son personas como cualquiera pero que están cumpliendo un rol equivocado a partir de una formación autoritaria.

También creemos que estas normas van a ir promoviendo una formación y educación para que el ciudadano deje de ser un oponente del policía y pase a ser respetado, con lo cual obviamente va a haber reciprocidad hacia la autoridad policial.

Permitir este tipo de edictos policiales y de detenciones, así como la forma de instaurar por vía no legislativa sino precisamente por vía de edictos lo que se conoce en la doctrina como delitos de la personalidad, es inconcebible. No puede ser que se detenga a una persona por un prejuicio de tipo racial, porque al policía no le gusta el pelo largo o porque en un barrio elegante camine alguien que desentona en su forma de vestir o porque es una señorita atractiva. Este tipo de segregación y de marginalidad es lo que se debe evitar a la sociedad.

No se puede revertir el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, adhiero a lo manifestado por los señores senadores y apoyo el proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Simplemente quiero expresar que me siento totalmente constanciado con el pensamiento y el canto a la libertad que han hecho los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, especialmente los señores senadores Lafferrière y Romero. El temor que tengo es que si esta noche aprobamos el proyecto se lo malinterprete en la aplicación práctica convirtiéndolo en una norma gatopardista por la que se propondría cambiar algo para que nada cambie.

Por eso, apoyo la sugerencia de la Presidencia en cuanto a la interpretación del caso. De modo que el proyecto del señor senador Lafferrière —que hoy no aprobamos porque lo que se sancionará será el de la Cámara de Diputados— vuelve a comisión. Y todo lo expresado aquí se tendrá en cuenta para hacer el gran debate y poder modificar la norma en forma estructural y definitiva.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: voy a ser muy breve. Quiero decir que estoy conmovido. Valió la pena llegar a la edad a la que llegué. Yo fui un líder de una huelga estudiantil en 1935, porque en aquel entonces defendíamos las libertades y los derechos humanos. A mí se me detuvo, como a tantos otros compañeros, para averiguación de antecedentes. Y no estuvimos veinticuatro horas, ni cuarenta y ocho, ni setenta y dos. Fueron cinco días, y por cierto maltratados. Durante la mitad del tiempo nuestra familia no sabía dónde estábamos. Era la vieja policía brava que por suerte los más jóvenes no han conocido, sobre todo aquella de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo no iba a ser rebelde yo si cuando a los dieciocho años fui a votar por primera vez en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el presidente de mesa me dijo: "¡Chico: usted ya votó!". Un vigilante me retiró de buenas maneras. Ya había votado. Así nació nuestra rebeldía. Estas son las razones por las que uno se afilió a un partido democrático a los veinte años para pelear por lo que no teníamos.

La huelga comenzó porque un profesor de la Universidad había plagiado un libro de anatomía y pretendía que los estudiantes lo compráramos. Parece que esto no era entendido por las altas esferas del país de aquel entonces. Ganamos la

huelga, pero todavía duelen los sablazos en las espaldas de tantos compañeros nuestros de aquel entonces.

La policía no detiene para identificación sino para averiguación de antecedentes. Detiene a chicos que tienen cédula de identidad en sus bolsillos para averiguar sus antecedentes, por lo que puedan hacer.

Quiero felicitar muy especialmente al presidente de la Comisión de Interior y Justicia, doctor Aguirre Lanari, y al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, por la oportunidad que dieron a los legos de estar rodeados de jueces y escuchar lo que dicen, defendiendo las libertades y la justicia.

No todos podemos estar de acuerdo. Puede no haber unanimidad. Debo decir que aunque quedé ilusionado por lo que decían los jueces, y agradecido por haber podido escucharlos, no puedo coincidir con lo manifestado por el señor ministro del Interior, que fue convocado para dar su opinión sobre este proyecto. Tengo un particular respeto por el señor ministro del Interior, y me une a él una especial amistad. Fuimos colegas en la Cámara de Diputados en distintas bancadas en el período 1973-1976. Dijo que era un mal proyecto, que era peor el remedio que la enfermedad.

Parece que algunos funcionarios se hacen autoritarios cuando llegan a la función pública. Estas palabras no son las mismas que pronunciaba cuando éramos diputados. El señor ministro dijo que estaba con él un asesor, comisario de policía, que podría aportar antecedentes en la materia. Puso un ejemplo banal: la detención en averiguación de antecedentes de alguien porque un vecino decía que alrededor de su edificio circulaba sin razón debida. Como si no se pudiese circular por la República Argentina sin una razón.

También citó el caso de detenciones cuando en ciertos lugares se producen aglomeraciones, alegando que la policía tiene un olfato especial para detectar a probables delincuentes; dijo que a éstos también se los lleva en averiguación de antecedentes hasta veinticuatro horas.

Estoy traumatizado. Tal vez a partir de hoy desaparezca este trauma que llevo encima desde hace tantos años, porque en otras épocas, que espero no vuelvan, tampoco sabíamos por qué nos llevaban detenidos. Yo tengo mi prontuario desde 1933. Son pocas líneas: mi nombre y apellido y los de mis padres, y la anotación "elemento disolvente". No tengo otro título.

Por otra parte, estuve muchas veces preso: me puso preso el proceso anterior y los otros que tuvimos. En todas esas oportunidades pudieron haber caratulado, pero lo único que hacían era ficharme. Así puedo decir que deben tener muchísimas fichas mías.

Por eso me siento tan conmovido de votar este proyecto de ley, acerca del cual los que entienden de normas legales dicen que no es la perfección, que no es la mejor norma.

Alguien dijo en este recinto una frase que ahora voy a recordar, pero al revés de como fue expresada: lo mejor es enemigo de lo bueno. El señor senador que la expresó, no sé si por un lapsus o porque piensa de esa manera, dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo digo que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Con la sanción de este proyecto otorgamos garantías, ya no a mis hijos sino a mis nietos, a quienes les gusta ir a ver festivales de rock.

Cuando le preguntamos al comisario —expresándole que estábamos hipersensibilizados por el caso del chico Bulacio— los motivos de la detención de este joven, el señor ministro dijo: "Señor senador, quiero contestar yo". Y la contestación que dio el señor ministro fue que no se había detenido solamente a Bulacio sino a catorce muchachos, de los cuales doce salieron en libertad.

Le pedí entonces al señor ministro que me explicara las causas de la detención, a lo que respondió que se habían agotado las entradas y esos chicos no tenían nada que hacer alrededor del establecimiento donde se iba a hacer el festival de rock, música que se está manifestando en todo el mundo.

Le dije al señor ministro que si ésa era la razón de la detención, yo le podía dar un consejo para ayudarlo a detener más gente. "Cada vez que haya una huelga ferroviaria —le dije al ministro— diríjase a los lugares donde hay paradas de colectivos. Verá cómo se pelea la gente. No tienen boleto ni hay lugar en los colectivos, pero igualmente suben y no sacan boletos. Ese es un motivo para detener a la gente."

Señor presidente: las explicaciones que nos han dado son autoritarias y vienen de mucho tiempo atrás. No sé por qué algunos funcionarios todavía las siguen dando. Yo sé que son hombres democráticos y que pelearon por la democracia; pero continúan dando explicaciones autoritarias.

Para mí, que durante muchos años he sentido la falta de garantías, constituye una gran satisfacción la aprobación del proyecto que estamos

considerando. Creo que constituye una de las mayores conquistas que han pasado por el Senado.

Sr. Presidente (Brasero). — Voy a ceder el uso de la palabra a la señora senadora por Catamarca; pero antes la Presidencia desea saber si hay más señores senadores que quieren anotarse en la lista de oradores.

Como advierto que no hay más senadores que lo solicitan, queda cerrada la lista de oradores.

Tiene la palabra la señora senadora por Catamarca.

Sra. Saadi de Dentone. — Señor presidente, señores senadores: he participado en las reuniones de la Comisión de Interior y Justicia y en la de Derechos y Garantías, y además escuché a los señores senadores que hicieron uso de la palabra, por lo que adhiero a lo expresado por ellos.

No obstante, deseo agregar que hay algo que no se mencionó, y es que el decreto 333/58 tiene el antecedente de ser violatorio de la Constitución Nacional, concretamente de su artículo 18, que dice que ningún habitante de la Nación puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente; también lo es con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, concretamente de su artículo 6º, que consagra el derecho a la libertad personal; viola el Código de Procedimientos en Materia Penal, en su artículo 184; la ley de hábeas corpus, número 23.098, que en su artículo 3º señala que corresponde el hábeas corpus cuando se denuncia un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.

La única autoridad competente es el juez. Pero en el caso de los edictos no es el juez sino el jefe de policía, por lo que una detención sin causa por la policía sería motivo de hábeas corpus.

Con la sanción de este proyecto estamos dando un mensaje que está necesitando la sociedad argentina.

Apoyo la vuelta a comisión del proyecto del señor senador Lafferrère a fin de que podamos perfeccionarlo. Adhiriendo en parte a las palabras del señor senador por Salta, hago notar que en la Constitución sancionada en nuestra provincia se contemplan algunas de estas normas. Por ejemplo, en su artículo 33 dice que ninguna detención o arresto se hará en la cárcel pública

destinada a los penados sino que deberá hacerse en otro lugar que se habilitará con ese objeto.

Este es uno de los aspectos que también se tienen en cuenta en la sanción de la Cámara de Diputados.

Quería dejar sentadas estas opiniones con relación a un tema muy importante que el pueblo argentino está esperando y que seguramente esta Cámara convertirá hoy en ley.

Sr. Presidente (Brasesco). — Como no hay más oradores anotados, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — El resultado afirmativo fue por unanimidad.

En consideración en particular.

— Se lee el artículo 1º.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Formulo la proposición que había anticipado en la consideración en general, recogiendo la sugerencia que formularon los señores jueces que nos visitaron ayer y que en su momento no tuvo objeciones por parte de los senadores que se encontraban presentes.

En concreto propongo que se sustituyan las palabras "... con noticia al juez ..." por la expresión "... en consulta al juez ...", por las razones que di oportunamente.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — De acuerdo con lo que fue votado oportunamente cuando sugerí que fuera tomado como dictamen la sanción de la Cámara de Diputados, solicité que la votación se hiciera en dos partes. Es decir, en primer lugar, que se votara la sanción de Diputados tal cual está redactada; en segundo lugar, si dicha votación resultase negativa, que se votaran las modificaciones propuestas.

Así sugiero que lo hagamos en este caso.

Sr. Presidente (Brasesco). — ¿Qué opina al respecto el presidente de la comisión?

Sr. Lafferrière. — No hay comisión, señor presidente. Se está tratando sobre tablas.

Sr. Sánchez. — Es el Senado el que resuelve y no la comisión.

Sr. Presidente (Brasesco). — En efecto, estamos tratando un asunto sobre tablas y no hay comisión.

Estamos en la consideración en particular y se ha propuesto una modificación. Hay que resolver si se acepta o se rechaza.

Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Como el señor senador Aguirre Lanari ha aludido a los senadores que estuvimos presentes en la reunión con los señores jueces realizada ayer, no quiero quedar como poco serio.

En general he manifestado que me parece mucho más correcta la modificación que propone el senador por Corrientes. Sin embargo también he dicho que es importante esta posibilidad que tenemos hoy en cuanto a disponer de un instrumento legal de estas características. Asumimos el compromiso de introducirle más adelante las modificaciones que surjan de su profundización. Por lo demás, ha sido muy abundante la argumentación que se ha dado en tal sentido.

Querría mencionar esto para no aparecer como poco serio frente a las opiniones que hemos dado y escuchado.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Es para plantear una moción de orden: que primero se vote la sanción de la Cámara de Diputados, tal como está, literalmente, sobre la que se han hecho fundadas argumentaciones.

Debemos proceder así para no entorpecer la sanción de una ley que está esperando el país y que el Senado está ansioso de aprobar.

Señor presidente: reitero mi moción de orden de votar la sanción de la Cámara de Diputados tal cual está.

Sr. Presidente (Brasesco). — Se toma en cuenta su moción de orden.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: deseo apoyar en todos sus términos la moción formulada por el señor senador por Córdoba: que se vote la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Brasesco). — Se va a votar el artículo 1º de la sanción de la Cámara de Diputados, tal cual está redactado.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — El resultado afirmativo fue por mayoría.

— El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.